

SESIONES

DE LA

DIPUTACION PERMANENTE DE CORTES

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. DIEGO MARTINEZ BARRIO

Sesión del jueves 14 de Enero de 1937

SUMARIO

Abierta la sesión a las doce y quince minutos, se lee y aprueba el acta de la anterior.
Designación del Sr. Tomás Taengua en sustitución del Sr. Andrés y Manso.
Ausencia de los Sres. Rosado Gil, Tomás y Piera y Fernández Ballesteros.—Adhesiones.

ORDEN DEL DIA.—Elección de Vicepresidente.—Acuerdo.
Prórroga del estado de alarma.—Comunicación.—Manifestaciones del Sr. Presidente.—Acuerdo.
Suplicatorio contra D. José Arizcun Moreno.—Dictamen.—Manifestaciones del Sr. Vargas.—Acuerdo.
Amnistía.—Proyecto de decreto-ley.—Manifestaciones de los Sres. Vargas, De Francisco.—Aclaración del

Sr. Presidente.—Intervención de los Sres. Ministro de Justicia y Díaz Ramos.—Nuevas aclaraciones del Sr. Presidente.—Manifestaciones de los Sres. Tomás Taengua, Palomo y Fernández Clérigo.—Rectificación de los Sres. Ministro de Justicia y Díaz Ramos.—Nueva rectificación del Sr. Ministro de Justicia.—Rectifican igualmente los Sres. Vargas y Fernández Clérigo.—Nueva rectificación del Sr. Vargas.—Interviene de nuevo el Sr. De Francisco.—Aclaración del Sr. Presidente.—Manifestación del Sr. De Francisco.—Rectificación del Sr. Fernández Clérigo.—Intervención del Sr. Corominas.—Nuevas manifestaciones de los Sres. Fernández Clérigo y Presidente.—Rectifican nuevamente los Sres. Díaz Ramos y Ministro de Justicia.—Aprobación en votación nominal.
Declaración y provisión de vacantes en la Diputación Permanente.—Propuesta del Sr. Presidente.—Acuerdo.
Se levanta la sesión a la una y quince minutos.

Abierta la sesión a las doce y quince minutos, en segunda convocatoria, con asistencia de los señores ministros de Justicia (García Oliver), Fernández Clérigo, Pérez Uria, Tomás Taengua, De Francisco, Díaz Ramos, Vargas, Palomo, Corominas, Casanueva, Pascual Leone y González Sicilia, se leyó y fué aprobada el acta de la anterior.

Leída una comunicación de la minoría socialista en que da cuenta de haber sido designado vocal suplente de la Diputación Permanente el señor Tomás Taengua, en sustitución del señor Andrés y Manso, dijo:

El Sr. **PRESIDENTE:** Queda tomada nota y se da posesión al señor Tomás Taengua del cargo para que ha sido nombrado.

La Diputación Permanente quedó enterada de la justificación de ausencia de los señores Rosado Gil, Tomás y Piera y Fernández Ballesteros y de su adhesión a los acuerdos que se adopten.

ORDEN DEL DIA

ELECCION DE VICEPRESIDENTE

El Sr. **PRESIDENTE:** El grupo parlamentario socialista propone para vicepresidente de la Diputación Permanente de Cortes al señor De Francisco. (Pausa.)

No habiendo ninguna petición de palabra, ¿se acuerda acceder a tal propuesta? (**Asentimiento.**) Queda acordado.

Se leyó la siguiente comunicación:

«Excmo. Sr.: Considerando necesario el Gobierno prorrogar por 30 días más el estado de alarma que se declaró por decreto de 17 de febrero de 1936, en todo el territorio nacional y plazas de soberanía, Ceuta y Melilla, con sujeción a lo preceptuado en la vigente ley de Orden público, tengo el honor de ponerlo en conocimiento de V. E. a los efectos de la autorización prevenida en el artículo 42 de la Constitución.

Valencia, 9 de enero de 1937.—El Presidente del Consejo de Ministros, Francisco Largo Cabañero.»

El Sr. **PRESIDENTE:** Se abre discusión. (Pausa.) No habiendo ninguna petición de palabra, ¿se acuerda conceder la autorización solicitada por el Gobierno? (**Asentimiento.**) Queda acordado.

Se leyó el siguiente dictamen:

A LAS CORTES

La Comisión de Suplicatorios, en su sesión de hoy, ha examinado el solicitado por el Presidente del Tribunal especial popular de Guadalajara contra el diputado Don José Arizcun Moreno, en causa por el delito de rebelión militar, y examina-

dos los antecedentes procedentes de dicho Tribunal y después de haber sido oído reglamentariamente el expresado Sr. Arizcun, ha acordado proponer a la Cámara, o en su caso a la Diputación permanente, la concesión de la autorización solicitada, por entender que las razones que en el suplicatorio se expresan no han sido desvirtuadas por las manifestaciones del inculpado.

Valencia 11 de enero de 1937.—El Presidente, E. Baeza Medina.—El Secretario, Pedro Vargas...

El Sr. **VARGAS**: Pido la palabra.

El Sr. **PRESIDENTE**: La tiene S. S.

El Sr. **VARGAS**: No hay necesidad de extenderse en consideraciones acerca de este dictamen de la Comisión de Suplicatorios; pero parece obligado que yo, que formo parte de ella, he intervenido en la redacción de aquél y hasta lo firmo como Secretario que hubo de encargarse accidentalmente de la Secretaría, estime que es perfectamente procedente acceder a la petición del Juez, porque el Sr. Arizcun ha confesado, además, toda su participación en los hechos revolucionarios, tanto cuando declaró ante el Juez especial, como, posteriormente, cuando lo ha hecho ante una delegación de la Comisión de Suplicatorios, de la que formaba parte el señor Baeza Medina.

El Sr. **PRESIDENTE**: ¿Se aprueba el dictamen? (**Asentimiento.**) Queda aprobado.

AMNISTIA

Seguidamente se leyó el siguiente proyecto de decreto-ley:

A LAS CORTES

Es un hecho evidente que una vez iniciado el movimiento de rebelión militar, producto de la deslealtad de un grupo de generales traidores, el pueblo español, al prestarse a la defensa de su libertad, no quiso prescindir del concurso de un gran número de ciudadanos que por efecto del medio social en que vivía España con anterioridad a la subversión, se hallaban cumpliendo condena o procesados por sus actividades contrarias a la legalidad establecida. El Gobierno se encuentra ante situaciones de hecho creadas por lo excepcional de las circunstancias que él no provocó de imperiosa necesidad de otorgarle el único cauce legal a su alcance. Y si a esto se agrega el sentido, siempre generoso, de las masas populares, en relación con cuantos se encontraban separados provisionalmente de la vida ciudadana y que en proporción considerable forman parte actualmente de milicias que se baten en los frentes por la defensa de la República, es bien notorio que existen motivos de alta equidad que aconsejan una medida que coordine el olvido del hecho consumado y la resuelta aspiración que tiene el Gobierno de adoptar cuantas resoluciones estén a su alcance, en evitación de que situaciones análogas puedan en lo sucesivo repetirse. Confía el Gobierno en que a la generosidad de esa medida corresponderá la gran masa consciente del pueblo español haciéndose acreedor a

ella con su conducta ulterior, al objeto de asentarse sobre base firme e inquebrantable las normas de convivencia social que demandan al propio tiempo el interés y el prestigio del régimen.

Teniendo en cuenta cuanto queda expuesto, y por acuerdo del Consejo de Ministros, el que suscribe tiene el honor de someter al examen y resolución de la Cámara el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo primero.—Se concede amnistía a los penados y encausados por delitos cometidos por móviles políticos o sociales con anterioridad al quince de Julio último.

Artículo segundo.—Se concede igualmente amnistía a los penados y encausados por delitos comunes y militares cometidos con anterioridad a la fecha expresada en el artículo anterior.

Artículo tercero.—De los beneficios que otorga esta ley quedan excluidos todos los sentenciados con posterioridad al quince de Julio último por Tribunales de las jurisdicciones de Guerra y Marina, por los Tribunales especiales populares y los Jurados de urgencia o de guardia, así como aquellos que se encuentren sometidos a la jurisdicción de los mismos o de los Tribunales ordinarios o puedan estarlo por sus actividades hostiles al régimen o hechos delictivos cometidos por enemigos de la República con anterioridad o posterioridad a la fecha indicada.

Quedan también excluidos de los beneficios que otorga esta ley todos los presuntos responsables de los delitos cometidos con motivo de la represión del movimiento revolucionario de octubre de mil novecientos treinta y cuatro.

Artículo cuarto.—Se autoriza al Ministro de Justicia para crear una Sala especial en el Tribunal Supremo, encargada de aplicar los beneficios que otorga esta ley.

Artículo quinto.—La presente disposición comenzará a regir el día de su publicación en la «Gaceta de la República».

Valencia, dos de enero de mil novecientos treinta y siete.—El Ministro de Justicia, J. García Oliver.

Previo la venia del Sr. Presidente, dijo:

El Sr. **VARGAS**: En principio yo estoy completamente de acuerdo con el espíritu que ha orientado este proyecto de ley de amnistía. Sin embargo, habría de llamar la atención sobre una fecha que se señala aquí. Se concede el indulto a todos los delitos, tanto de carácter político y social como los comunes, cometidos con anterioridad a la fecha del 15 de julio. Hay, no obstante, algunos casos en que resultarían beneficiadas gentes que han tenido participación en los sucesos revolucionarios, ya que los hechos por que han sido condenados están comprendidos en aquella fecha, y entre otros puedo citar el caso siguiente: Todos recordarán perfectamente el hecho cometido aquí, en Valencia, desde la Radio; este hecho ocurrió ocho o diez días antes. Unos señores fueron a la Radio, se apoderaron de ella por sorpresa, pronunciaron unos discursos y anunciaron que iba a triunfar el fascismo en España. Con este proyecto de ley esos individuos, que han sido condenados por los Tri-

bunales de Valencia, quedan amnistiados, y en igualdad de condiciones pueden encontrarse otros hechos cometidos en esas fechas y que tienen conexión con el movimiento. Esto sin contar una porción de delitos cometidos por elementos manifestamente fascistas contra personas de los partidos del Frente Popular, asesinatos cometidos en Madrid y en otra porción de sitios de España, etcétera, etc. En estas condiciones, yo me permitiría indicar, especialmente al Sr. Ministro aquí presente, la conveniencia de ver esto para evitar que en la concesión de esta amnistía puedan estar comprendidos algunos individuos... (El señor **PALOMO**: En el artículo 3.º queda salvado eso, porque dice: «...así como aquellos que se encuentran sometidos a la jurisdicción de los mismos o de los Tribunales ordinarios, o puedan estarlo por sus actividades hostiles al régimen o hechos delictivos cometidos por enemigos de la República, con anterioridad o posterioridad a la fecha indicada.»)

El Sr. **PRESIDENTE**: El Sr. De Francisco tiene la palabra.

El Sr. **DE FRANCISCO**: Voy a hacer una objeción y es la siguiente: Que teniendo en cuenta la importancia del proyecto de Decreto que se somete a la Diputación permanente hubiera sido, no sólo deseo personal mío, sino, por lo menos, de los compañeros que constituyen nuestra minoría, el haberlo conocido con alguna anticipación con objeto de haberlo estudiado y, si había lugar a ello, hacer las observaciones pertinentes o dar, sin otra observación, nuestra conformidad al proyecto. Se nos obliga ahora a estudiarlo y a repensarlo y se nos impide, por tanto, dar un criterio de minoría, puesto que sólo podemos dar un criterio personal. En líneas generales, no se puede hacer observación alguna, pero quizá hubiera particularidades que lo merecieran. Me encuentro, por lo tanto, en este caso, que no puedo ni debo hacer manifestaciones de orden personal. Si el Ministro y el Consejo que ha aprobado este proyecto lo consideran de suma urgencia y, por consiguiente, hubiera de ser aprobado en esta sesión, nosotros, como minoría, nos someteríamos al criterio del Gobierno; pero si no fuera de extremada urgencia y se permitiera hacer un estudio del proyecto y que lo conocieran, no sólo los miembros de esta Diputación permanente, sino incluso los de las minorías, veríamos con complacencia que se satisficiera nuestro deseo. Claro que esto obligaría a aplazar su discusión hasta otra sesión inmediata. Por ello me atengo al criterio del Gobierno, que podría ser expresado por el Ministro de Justicia, salvo lo que mis compañeros expresen sobre el particular. Así, pues, no puedo exponer, en estas condiciones, un criterio de la minoría por no haber cambiado impresiones sobre el proyecto que se ha sometido a nuestra deliberación.

El Sr. **PRESIDENTE**: En la formación del orden del día para la sesión que estamos celebrando, hube de consultar, como es costumbre, al Presidente del Consejo de Ministros respecto a la inclusión en este orden del día de los asuntos en que tuviera interés el mismo. El Presidente me manifestó que era acuerdo del Gobierno someter a la deliberación y resolución de la Diputación

Permanente de Cortes este proyecto de ley; que lo consideraba urgente y que solicitaba de la Diputación permanente que fuera incluido en el orden del día y, en su caso, aprobado.

El Sr. Ministro de Justicia, que está presente, puede —yo me limito a dar la referencia que del Sr. Presidente del Consejo he recibido— dar las explicaciones que estime oportunas.

El Sr. **MINISTRO DE JUSTICIA** (García Oliver): El Gobierno se ha encontrado con un problema de hecho y otro de derecho. Con un problema de hecho, por cuanto podemos decir que en la España que está libre del fascismo, en un 96 ó 97 por 100, excepto aquellos pequeños núcleos de presos que existen en el país vasco, están ya en libertad por acción directa del pueblo, y para un Ministro de Justicia y para un Gobierno que se precia de serlo, los detenidos se encuentran en condiciones que no hay más remedio que legalizar su situación o mandarlos detener.

Se da el caso de que la mayoría de los que han sido libertados, se encuentran, asimismo, luchando en el frente, enrolados en milicias, por lo que no hay más remedio que liquidar esta situación, legalizándola.

Por otro lado, si nosotros ahora examinamos la situación de todas las gentes que se encontrarían detenidas, caso de que mandásemos detenerlas, nos encontraríamos con que una gran cantidad de presos que se hallarían en Alicante, en Ocaña, en Alcalá, en San Miguel de los Reyes, etc., no podrían ser puestos en libertad, porque habiendo sido condenados por Audiencias que están en poder de los facciosos, la falta de envío de la liquidación de condena les impediría ser puestos en libertad. Ni siquiera podría concedérseles la libertad condicional que todo detenido tiene derecho a solicitar, por cuanto no podría tramitarse.

Todas estas consideraciones, tenidas en cuenta por el Gobierno, le han puesto en el trance de tener que legalizar, de una parte, la situación de los que se encuentran en libertad, y, al mismo tiempo, poner en libertad a los pocos que quedan presos. Naturalmente que al hablar de amnistía parece que no se debiera incluir a los presos por delitos comunes, a los que se podría dar un indulto total sin liquidar sus antecedentes penales, como ordinariamente se ha hecho siempre que no ha habido una gran revolución como la presente; pero tampoco podía hacerse esto ahora, porque el Archivo Central de antecedentes penales, que estaba en el Ministerio de Justicia, ha sido incendiado y destruido a consecuencia de los bombardeos, y ante esta destrucción material el Gobierno dió un decreto legalizando esta situación; es decir, cancelando todos los antecedentes penales y ordenó reconstruir el archivo de antecedentes penales a partir del 15 de julio.

El Sr. **PRESIDENTE**: El Sr. Díaz Ramos tiene la palabra.

El Sr. **DÍAZ RAMOS**: Quiero hacer algunas consideraciones de carácter general al proyecto de amnistía presentado por el Sr. Ministro, procurando emplear la mínima cantidad de tiempo, como requiere la urgencia de su discusión. Parece existir en este proyecto el peligro de

que fueran puestos en libertad muchos enemigos del régimen que se hallan presos por delitos cometidos con anterioridad al 16 de Julio. Si bien, en parte, el artículo 3.º del proyecto de decreto ley lo aclara un poco, en cambio tenemos un artículo 2.º que dice lo siguiente: «Se concede igualmente amnistía a los penados y encausados por delitos comunes y militares cometidos con anterioridad a la fecha expresada en el artículo anterior.» Esto es muy claro y concreto.

Hay hechos, y yo podría citar algunos, sobre todo el caso de Alcalá de Henares, de todos conocido, cuyos autores, enemigos del régimen, con este artículo, podrían salir inmediatamente a la calle, y yo creo necesario que se especifique lo más claramente posible, a fin de que no puedan salir a la calle todos aquellos que han atentado o cometido asesinatos contra las personas pertenecientes a los partidos políticos y organizaciones sindicales que hoy están vinculadas al régimen.

Según yo veo, en la redacción del proyecto de ley, muchas de esas personas también saldrían a la calle. Traigo algunas proposiciones para cada uno de los artículos, con el fin de que, salvando todo aquello que estoy seguro entra en el propósito del señor Ministro de Justicia, pudieran salir todos aquellos individuos que no son enemigos del régimen; pero que no pueda salir ni siquiera uno de los otros. Por tanto, yo quiero hacer algunas proposiciones tendentes a aclarar el articulado del proyecto, a fin de que no haya ninguna duda para nadie. El artículo 1.º del proyecto dice: «Se concede amnistía a los penados y encausados por delitos cometidos por móviles políticos y sociales con anterioridad al 15 de Julio.» Mi proposición consiste en agregar lo siguiente: «...siempre que esos penados no hayan sido condenados por actividades políticas o sociales ligadas a la acción criminal de individuos o partidos que se hubiesen alzado en armas contra el Gobierno legítimo de la República.»

Al artículo segundo propongo que se agregue lo siguiente: «...en tanto que esas condenas y causas por delitos comunes no hayan sido motivadas por atentados contra personas pertenecientes a partidos políticos y organizaciones sindicales encuadradas hoy en el Frente Popular.» Y sigue: «Por lo que respecta a los militares, serán beneficiados con la amnistía, siempre que no hayan sido condenados o encausados después del 16 de febrero de 1936 por sus actividades contra la República democrática.»

Al artículo tercero: «Los detenidos preventivos serán sumariados y juzgados a la mayor brevedad; y aquellos detenidos considerados como peligrosos para el régimen republicano-democrático, aunque no hayan sido condenados, serán enviados, en tanto se substancia su causa, a los campos de trabajo.»

Por último, al artículo cuarto propongo, en sustitución del mismo, lo siguiente: «Para la aplicación de esta ley el Ministro de Justicia creará un Tribunal popular especial, integrado por los representantes de los partidos políticos y organizaciones sindicales que tienen representación en el Gobierno, cuyo Tribunal será asesorado por los magistrados que el Ministro crea conveniente.»

Al proponer estas adiciones al proyecto, lo hago en el sentido de que, salvando el buen propósito del Ministro de Justicia al redactarlo, no puedan quedar en la cárcel ninguno de los condenados que tengamos interés en hacer salir a la calle; pero al mismo tiempo lo hacemos con el propósito de que todo aquel que sea enemigo del régimen no pueda ser libertado. Para nosotros sería una gran responsabilidad la de que, aparte los fascistas y enemigos del régimen que andan por la calle, podamos poner en libertad a quienes van a venir con esta libertad a empeorar un tanto la situación que ya tenemos; creo que, recogiendo todo lo bueno que tiene el proyecto de ley, algunas de estas proposiciones pueden mejorarlo o completarlo. (El Sr. Tomás Taengua pide la palabra.)

El Sr. **PRESIDENTE**: A los fines de regularizar la discusión, he de señalar que la costumbre en la aprobación o desaprobación de los proyectos de ley presentados por los Gobiernos a la Diputación permanente de Cortes, ha consistido en que ésta examine esos proyectos de ley, abra sobre ellos discusión, emita el parecer que le sugiera su lectura, y este parecer es recogido o desechado por el Ministro, procediéndose inmediatamente a votarlos. Pero faltaría a un deber esencial, dentro de la función que desempeño, si no recordara a todos los señores Diputados las circunstancias singulares que actualmente se dan en la Diputación permanente.

La Diputación permanente está constituida en su totalidad —la totalidad de los miembros aquí presentes— por partidos que se encuentran representados en el Gobierno, y, por tanto, aun dentro de aquellos límites de libertad en que pueden moverse todos los señores Diputados para discutir las iniciativas ministeriales, han de tener en cuenta estos dos hechos: uno, que se trata de un proyecto de ley que ha tenido un previo acuerdo de Consejo de Ministros, y otro, que bastaría que faltara el voto favorable de un Sr. Diputado para que el proyecto de ley no pudiera salir aprobado. Son limitaciones y restricciones que los Sres. Diputados se tienen que establecer a sí mismos a la hora de discutir y de votar, porque detrás de eso saben la responsabilidad política que contraen.

En estas condiciones, después de hechas estas aclaraciones, que, repito, no tienen otro propósito que el de regularizar la discusión, la seguiremos. En definitiva, oiremos al Sr. Ministro de Justicia y él nos dirá lo que puede o no aceptar de las indicaciones que se le hagan.

El Sr. Pascual Tomás tiene la palabra.

El Sr. **PASCUAL TOMÁS**: Después de recoger y dar su justo valor a todas y cada una de las manifestaciones que acaba de hacer el Señor Presidente, he de decir que había pedido la palabra para formular una sencilla pregunta al señor Ministro de Justicia. Ha dicho el Sr. Ministro que este proyecto viene a resolver y dar legalidad a un problema de hecho, ya consumado. Es decir, que la amnistía que vamos a conceder ha sido otorgada ya abriendo las puertas de las cárceles en todas aquellas provincias leales al Gobierno de la República. Pero, Sr. Ministro, lo que me mueve a formular a S. S. la pregunta es lo siguiente: si es una realidad que han sido abiertas las puertas de las cárceles y que estos hombres están en libertad, ¿no cree el Sr. Mi-

nistro de Justicia, que tiene sobrados motivos para conocer cómo se encuentra el panorama internacional en orden y relación a todas las cuestiones que tienen por escenario a nuestra España, que si este proyecto de ley se recoge y publica por la prensa enemiga se va a facilitar un argumento más, un instrumento de acción y de infamia más contra nuestra Patria, pues al lanzarle a los cuatro vientos, por todos los países del mundo, se colocará al Gobierno legal de la República en situación un poco violenta? Esta sencilla pregunta es la que quería dirigir al señor Ministro de Justicia. Sé que el hecho es legal, que esta amnistía viene a resolver un problema parecido al que se resolvió cuando nosotros salimos de la cárcel el 17 de febrero; se nos concedió la amnistía cuando estábamos en la calle, porque previamente se nos habían abierto las puertas de los presidios; pero aquella amnistía tenía para el mundo democrático el matiz de la liberación de unos hombres que se hallaban sufriendo condena por defender a la República y a España; mas tengo cierto temor, y por eso recurro al conocimiento de S. S., como Ministro de Justicia, para que diga si al publicarse ahora en toda la prensa del mundo la noticia de que van a ser amnistiados aquellos penados a que se refiere el artículo segundo del proyecto de ley, o sea los condenados por delitos comunes, no se dará motivo para escarnecer y calumniar una vez más a nuestro país.

Nosotros agradecemos mucho las palabras que ha pronunciado el Sr. Presidente, pero hemos de decir que votaremos el proyecto sin formular objeciones de ninguna clase. Es un acuerdo del Consejo de Ministros y disciplinariamente daremos nuestro voto favorable a lo por el Consejo de Ministros acordado; pero he creído conveniente formular al Sr. Ministro de Justicia la pregunta que en esta intervención le he dirigido.

El Sr. **PRESIDENTE**: El Sr. Palomo tiene la palabra.

El Sr. **PALOMO**: Simplemente, para subrayar —aunque no lo necesitan— las palabras del Sr. Presidente. Pero, en fin, advierto que nos encontramos ante un hecho consumado. Las fuerzas que representa el Gobierno son aquellas que, políticamente, representamos los que integramos esta Diputación permanente de Cortes. Formular nosotros objeciones a este proyecto de ley sería evidenciar una disconformidad que nosotros no mantenemos en manera alguna. En espíritu, el proyecto me parece imprescindible, por las razones que alegaba el señor Ministro y por otras que todos tenemos. Ahora bien; lo que yo quería —y para esto es para lo que he pedido la palabra— era rogar al Sr. Presidente que cuando hayan de venir a estudio de la Diputación permanente proyectos de tal monta, tenga la bondad de ponerlos, con la anterioridad suficiente, a estudio de los diputados que constituyen esta Diputación para, si se pueden o deben hacer objeciones, dentro de la máxima cordialidad y respeto a los acuerdos del Consejo de Ministros, hacer aquellas observaciones que se estimen pertinentes por los diputados.

El Sr. **PRESIDENTE**: Tiene la palabra el señor Fernández Clérigo.

El Sr. **FERNANDEZ CLERIGO**: Yo no trato de hacer una defensa del proyecto sometido al examen de la Diputación permanente porque de ello está encargado, y seguramente lo habría de hacer mejor que yo, el señor Ministro de Justicia. Pero, en fin, he oído algunas objeciones a este proyecto de ley, especialmente en su articulación, y a ello he de limitarme, porque no quiero entrar en cuestiones de política general, en las que tendría que interpretar un criterio de partido, que, por las mismas razones que ha expuesto el Sr. De Francisco en nombre de la minoría socialista, no tenemos formado. Y me parece que todas estas objeciones están desvanecidas si se tiene en cuenta el contenido del artículo 3.º del proyecto que se examina, porque todos aquellos hechos que directa o indirectamente estén relacionados con actividades hostiles al régimen republicano, bien en los hechos, bien en las personas, objetiva o subjetivamente, están de un modo claro exceptuados del beneficio de la amnistía en el artículo 3.º Quedan exceptuados todos aquellos que «se encuentren...» (Yo aquí emplearía mejor —sobre esto haré una indicación— la expresión «se encuentran», porque el mismo sentido subsiste después al decirse «o puedan estarlo»), ...que «se encuentran» sometidos a la jurisdicción de los mismos o de los Tribunales ordinarios o puedan estarlo en lo futuro, naturalmente, por sus actividades hostiles al régimen o por hechos delictivos cometidos por enemigos de la República con anterioridad o posterioridad a la fecha indicada.

Todo lo que signifique un atentado, cuyo móvil es ir contra una persona representativa, precisamente por la significación política que tiene dentro de un partido, o cuya finalidad es atacar o derrocar el régimen republicano, a mi juicio está perfectamente comprendido en la excepción del artículo 3.º, y por eso creo que sin más modificación que la de sustituir la palabra «encuentren» por «encuentran», queda perfectamente redactado el proyecto y comprende todos los casos que han suscitado algunas dudas o temores en el ánimo de algunos señores diputados que han hecho uso de la palabra.

Creo que con esto he contribuido en lo posible a esclarecer esas dudas que se han expuesto.

El Sr. **MINISTRO DE JUSTICIA**: Pido la palabra.

El Sr. **PRESIDENTE**: La tiene S. S.

El Sr. **MINISTRO DE JUSTICIA** (García Oliver): Desde luego empiezo por reconocer que la inquietud del diputado que me formula una pregunta tan concreta me parece lógica. Sin embargo, pienso de manera distinta. Yo entiendo que si actualmente, en el exterior, se ha formado una notoria opinión de interés por las cosas de España, se debe a la obra de propaganda que se viene realizando en torno a las cuestiones que afectan al Ministerio de Justicia. A tal punto es esto cierto que ayer solicitaron desde Londres una conferencia conmigo; me rogaban que les hablásemos algo acerca de lo que estamos haciendo en materia de justicia. Ya sea por las exageraciones que alredeor de este tema se lanzan por el enemigo, ya sea

por el cariño que despierta en algunos sectores nuestra obra (**Un Sr. Diputado:** Por lo primero quizá, más que por lo segundo), el caso es que se está formando un estado de opinión internacional que se interesa vivamente por la situación de España y, sobre todo, repito, por los problemas de justicia. Y en Justicia me parece que lo más ponderado es tener el valor de las realidades; porque han sido tantas las exageraciones lanzadas sobre lo que ha pasado en España, tantas y de tal monta, que ya no es posible abultarlo más y nadie puede asustarse de lo que se le diga. Al contrario, frente a la campaña de difamaciones y de exageraciones, es altamente beneficioso que, al fin, se imponga la obra seria, legal y responsable de un Gobierno que día a día va imponiendo una legalidad, sin ocultar para nada los hechos que hayan podido dar lugar a ella. Atacados por el Gobierno de verdad los hechos que han podido dar lugar a deformaciones, las exageraciones, los abultamientos en el extranjero caerán por su base, ya no tendrán eficacia.

Nosotros hemos tenido muy en cuenta este aspecto al redactar el proyecto. Y lo mismo en este punto que en lo que se refiere al régimen penitenciario, que nos ha valido que digan los rebeldes que España va a ser el paraíso de los asesinos, que a los campos de trabajo, lo más importante es que el Gobierno afronta el problema, que atiende a realidades. De esta forma se quita una poderosa arma al enemigo para su campaña de calumnias y la opinión mundial se encontrará ante hechos consumados y no tendrá otro remedio que ir a analizar si lo hecho está bien o está mal.

El Sr. DIAZ RAMOS: Pido la palabra.

El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S.

El Sr. DIAZ RAMOS: Para insistir en las indicaciones que antes he formulado. Creo de mucha importancia volver a exponer mi opinión en el sentido de que no quede en el proyecto resquicio alguno que pueda ser utilizado por los enemigos del régimen en su beneficio. Y como los asesinatos cometidos contra personas pertenecientes a partidos políticos u organizaciones sindicales afectas al régimen, jurídicamente son considerados como delitos comunes, no veo que con arreglo al proyecto los autores de dichos asesinatos queden retenidos, pues bastaría con decir «yo no soy enemigo del régimen», y considerado el delito como común, ya es lo suficiente para poner a su autor en libertad.

Mi propósito, pues, no es otro que el de que con arreglo al proyecto, no puedan quedar impunes los asesinatos cometidos en las condiciones señaladas. El proyecto puede ser todo lo amplio que se quiera, pero sin llegar a ese extremo.

Esto es lo único que me ha movido a dirigir estas objeciones al articulado del proyecto.

El MINISTRO DE JUSTICIA: Pido la palabra

El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S.

El Sr. MINISTRO DE JUSTICIA (García Oliver): Ni el Ministro ni el Gobierno han tenido la intención de beneficiar en lo más mínimo con este proyecto a los individuos a que se ha referido el compañero Díaz Ramos. Y de hecho ya están exceptuados. Pero, además, nos encontramos también ahora ante hechos consumados: se puede decir que los que han cometido tales asesinatos no existen; la mayor parte han desaparecido... Y si

alguno existiera, con la excepción que se hace en el proyecto basta para incapacitarles del beneficio de la amnistía.

El Sr. VARGAS: Pido la palabra.

El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S.

El Sr. VARGAS: Evidentemente, a todos nos guía el mismo propósito: el de que los beneficios de esta amnistía alcancen únicamente a los sentenciados por delitos no contrarios al régimen. En esto estamos todos de acuerdo y claro está que todos habremos, en definitiva, de votar el proyecto de ley del Gobierno. Pero yo me permito hacer la siguiente indicación: El artículo 3.º tiene dos partes. La primera hace referencia a todos los sentenciados con posterioridad al 15 de Julio; en la segunda se habla de que quedan también excluidos «...los que se encuentren sometidos a la jurisdicción de los mismos o de los Tribunales ordinarios» etcétera, etc., y yo me pregunto: ¿qué se entiende por «estar sometidos a los Jurados o a los Tribunales de cualquier clase»? Aquellos individuos que han sido condenados con anterioridad al quince de Julio por delitos cometidos en personas afectas a Partidos implicados en el Frente Popular, ¿están o no comprendidos en la amnistía?

Yo creo que esta segunda parte del artículo 3.º podría redactarse con una mayor claridad, y de esta forma se salvarían también los escrúpulos que, a mi juicio muy justamente, siente el señor Díaz. ¿Qué significa «estar sometido»? ¿Estar sometido a los Jurados y Tribunales después de condenado?

El Sr. FERNANDEZ CLERIGO: Pido la palabra.

El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S.

El Sr. FERNANDEZ CLERIGO: Me parece que el artículo está redactado con la posible claridad dentro de la concisión que ha de tener un texto legal de esta naturaleza, porque ya anteriormente, en el primer inciso del artículo 3.º, habla de los condenados. (**El Sr. VARGAS:** Eso está bien.) Ya no hay que dudar. Aquellos cuyo juicio está fenecido por una sentencia ejecutoria, quedan exceptuados en el párrafo primero del artículo 3.º (**El Sr. VARGAS:** Sentenciados con posterioridad al quince de Julio; esto está claro. Vamos a la parte segunda.) «Así como aquellos que se encuentren sometidos a la jurisdicción de los mismos»; es decir, que los que no estén condenados pueden encontrarse solamente en una de estas dos situaciones: o sometidos a un procedimiento ante los Tribunales, o, sin estar aún sometidos a un procedimiento, que puede venir en el futuro. (**El Sr. VARGAS:** Sí, señor.) «Los que se encuentran sometidos a la jurisdicción de los mismos», es decir, que hay un procedimiento dirigido contra ellos que los pone actualmente bajo su jurisdicción; «o puedan estarlo», es decir, los que puedan estarlo en el futuro, que aunque aún no se haya dirigido contra ellos el procedimiento se esclarezca que hay una razón para dirigirlo. Entonces se les somete a este procedimiento, porque sólo el que está encartado en un procedimiento le puede ser aplicable una amnistía como participante en un hecho punible. De manera que en el artículo están comprendidos, en mi sentir, los tres supuestos posibles: el supuesto de ejecutoria con sentencia (**El Sr. VARGAS** pide la palabra);

el supuesto de que tiene un procedimiento pendiente y el de que puede estar, en el futuro, sujeto al procedimiento. ¿Por qué? Pues por hechos que no son delitos políticos o sociales, porque la mente redactora del proyecto ha huído aquí —a mi juicio con acierto indiscutible— de emplear el concepto jurídico, un poco hermético y de categoría, de «delitos políticos y sociales»; para huir de esto ha dicho, con más amplitud de concepto, «por sus actividades hostiles al régimen», con lo cual ya no cabe encerrar el hecho en una categoría meramente jurídica y decir «¡Ah, no; este no es un delito político», pues bastará con que haya una actividad final hostil al régimen, o hechos delictivos cometidos por enemigos de la República, aunque el delito fuese de tipo común y se quisiese encuadrar en una categoría neta de tal delito común, si el autor es enemigo de la República, interpretando bien el sentido del texto no estaría comprendido en la amnistía. Bastará que sea enemigo de la República; es decir, que sea objetivamente la que fuese la categoría del delito, siempre que subjetivamente él sea un enemigo de la República no estará comprendido —repeto— en la amnistía. Por consiguiente, me parece que, sin más que la modificación que yo indicaba, queda perfectamente diáfano el texto, porque comprende las ejecutorias por sentencia, los sometidos en la actualidad a procedimiento, los que puedan estarlo en lo futuro por cualquier actividad hostil al régimen, o siendo ellos, sea cualquiera la clase de los delitos que hayan cometido, enemigos del régimen y bastará esto para exceptuarlos de la aplicación de la amnistía. (El Sr. **DE FRANCISCO**: Pero no expresa el caso de los que sufran condena, si hay alguien que la sufriera en la actualidad, y esta es una aclaración que yo me permito ahora formular.)

El Sr. **VARGAS**: Pido la palabra.

El Sr. **PRESIDENTE**: La tiene S. S.

El Sr. **VARGAS**: Esa es la pregunta que hice antes al señor Fernández Clérigo y que ahora le formule directamente.

En esto, por decirlo así, hay tres partes: Los condenados posteriormente al 15 de Julio, caso que no ofrece duda; los que estén sometidos a los Tribunales por delitos cometidos antes o después, o los que puedan estarlo en lo sucesivo. ¿Es esto lo que dice el artículo? (El Sr. **FERNANDEZ CLERIGO**: Sí, señor.) Mi pregunta, y participo de la opinión de los Sres. Díaz y De Francisco, era la siguiente: Individuos que han sido condenados con anterioridad al 15 de Julio. Voy a citar un hecho concreto. En la causa seguida por atentado contra el Sr. Jiménez de Asúa recayó sentencia condenatoria contra uno o dos individuos, los cuales, con arreglo a este artículo, no quedan exceptuados de la aplicación de los beneficios de esta amnistía. Y lo que nosotros queremos, precisamente, es que a estos individuos no les alcancen los beneficios de una amnistía, y con la redacción del artículo 3.º la cuestión no está clara. A todos nos guía el mismo afán.

El Sr. **DE FRANCISCO**: Pido la palabra.

El Sr. **PRESIDENTE**: La tiene S. S.

El Sr. **DE FRANCISCO**: Me permito dirigir una aclaración al señor Ministro de Justicia, en la inteligencia de que, si encuentra alguna dificultad

para intercalar mi propuesta en el artículo y lugar de que se trate, no he dicho nada; pero en el caso de que coadyudara a los deseos aquí manifestados, me daría por muy satisfecho.

En la redacción del artículo bastaría intercalar la siguiente expresión: «...así como aquellos que se encuentren sufriendo condena (esto es lo que falta) o sometidos a la jurisdicción de los Tribunales ordinarios.» Con esa interpelación quedaría, a mi juicio, suficientemente clara y hasta completaría, creo yo, el pensamiento del propio Gobierno. Si no lo entiende así el Sr. Ministro, entonces no he dicho nada.

El Sr. **PRESIDENTE**: Es decir, con objeto de que no cambiemos los términos de la facultad de la Diputación permanente, se entiende que el señor Ministro de Justicia hace la reforma del artículo 3.º en el sentido que queda expuesto.

El Sr. **DE FRANCISCO**: Exactamente.

El Sr. **PRESIDENTE**: Quiero recordar a la Diputación permanente que la facultad de este Cuerpo no es otra sino la de aceptar o rechazar, en globo, los proyectos de ley que se le someten, y que cualquier modificación que se haga en ellos ha de ser por iniciativa del Ministro correspondiente.

El Sr. **DE FRANCISCO**: Por eso me he permitido hacer la indicación al Sr. Ministro. Si lo acepta, bien, y si no, no he dicho nada. (El Sr. **VARGAS**: Quizás la redacción pudiera ser en otros términos.)

El Sr. **FERNANDEZ CLERIGO**: Pido la palabra.

El Sr. **PRESIDENTE**: La tiene S. S.

El Sr. **FERNANDEZ CLERIGO**: Quedaría así: «De los beneficios que otorga esta ley quedan excluidos todos los sentenciados, con posterioridad al 15 de Julio último, por Tribunales de las jurisdicciones de Guerra y Marina, por los Tribunales especiales populares y por los Jurados de Urgencia o de Guardia, así como aquellos que se encuentran sufriendo condena o sometidos a la jurisdicción de los mismos o de los Tribunales ordinarios, o puedan estarlo por sus actividades hostiles al régimen o hechos delictivos cometidos por enemigos de la República con anterioridad o posterioridad a la fecha indicada.»

El Sr. **COROMINAS**: Yo he observado que si decir «cumpliendo condena» no es la frase apropiada, porque entonces no comprendería a los que están en rebeldía en la calle. Creo que lo mejor será poner «sufriendo condena».

El Sr. **FERNANDEZ CLERIGO**: La palabra «sufrimiento» no me parece que debe aplicarse, porque no responde a nuestro concepto de la pena.

El Sr. **PRESIDENTE**: La explicación que da el Sr. Corominas es perfectamente lógica.

El Sr. **FERNANDEZ CLERIGO**: Lo mejor sería poner «sujeto a condena».

El Sr. **DÍAZ RAMOS**: Pido la palabra.

El Sr. **PRESIDENTE**: La tiene S. S.

El Sr. **DÍAZ RAMOS**: Para someter una propuesta respecto del último punto al Sr. Ministro de Justicia, por si tiene a bien tomarla en consideración.

Propongo, en sustitución del artículo 4.º, lo siguiente: «Para la aplicación de esta ley, el Minis-

tro de Justicia creará un Tribunal Popular especial, integrado por los representantes de los partidos políticos y organizaciones sindicales que tienen representación en el Gobierno, cuyo Tribunal será asesorado por los Magistrados que el Ministerio crea conveniente.» Esto lo propongo por la importancia que tiene la aplicación de la amnistía y con el fin de darle un carácter popular, siempre, naturalmente, de acuerdo con el asesoramiento que estime oportuno el Sr. Ministro de Justicia. Me parece que sería lo mejor.

El Sr. **MINISTRO DE JUSTICIA** (García Oliver): Pido la palabra.

El Sr. **PRESIDENTE**: La tiene S. S.

El Sr. **MINISTRO DE JUSTICIA**: Es muy reciente la fecha en que se dió posesión del cargo al Presidente del Tribunal Supremo para que ahora sea sustraída a este alto Tribunal la atribución que ha tenido siempre. La objeción del señor Díaz Ramos desde luego no me parece adecuada, dado el carácter popular que tiene la amnistía; pero, si no estoy equivocado, esta tramitación, cuando ha habido que definir los matices de las amnistías, se ha remitido siempre al Tribunal Supremo, y puesto que ayer se ha dado la importancia que se le dió a este Organismo con vistas a la opinión internacional, si ahora se le sustrajera esa atribución, seguramente causaría muy mal efecto.

El Sr. **PRESIDENTE**: Ya se deja constancia del deseo del Sr. Díaz Ramos y de la explicación del Sr. Ministro, y, por lo tanto, podemos pasar a la aprobación del proyecto de ley.»

Sometido el proyecto a votación nominal, ésta dió el siguiente resultado:

Señores que dijeron: sí.—Vargas, Díaz Ramos,

De Francisco, Tomás Taengua, Pérez Urria, Fernández Clérigo, González Sicilia, Pascual Leone, Casanueva, Corominas, Palomo, Presidente.

Adheridos.—Tomás y Piera, Rosado Gil, Fernández Ballesteros.

Total: 15.

El Sr. **PRESIDENTE**: Habiéndose obtenido el «quorum» que prescribe la Constitución de la República, queda aprobado el proyecto de ley presentado por el Sr. Ministro de Justicia.

Próximo a la reunión de Cortes que por precepto constitucional se ha de celebrar el día 1 de febrero, someto a la consideración de la Diputación permanente el que declare las vacantes de aquellos señores Diputados que por sus actividades contra el régimen, públicamente conocidas, y por su incomparencia a las reuniones de la Diputación permanente de Cortes desde que se efectuó la rebelión militar, obligan a normalizar la situación interior de este organismo. Esos señores son los siguientes:

Vocales propietarios: Gil Robles, Lucia, Carrascal, Aizpun, Ventosa, Calvo Sotelo (por muerte), y

Vocales suplentes: Fernández Ladreda, Alvarez Robles, Giménez Fernández, Madariaga, Velayos, Suárez de Tangil y Rodés.

Mi proposición es que se declaren las vacantes y que se lleve consiguientemente al orden del día de la primera reunión plenaria de Cortes el nombramiento de los Sres. Diputados que hayan de sustituirlos. ¿Se aprueba así? (**Asentimiento.**) Queda aprobado. ¿Algún señor Diputado quiere hacer uso de la palabra para otro asunto? (**Pausa.**) Se levanta la sesión.»

Eran las trece horas y quince minutos.